

PERFIL DE PROYECTO (PP)
ECUADOR

I. DATOS BÁSICOS

Título del proyecto:	Sistema Nacional de Gestión de Tierras Rurales		
Número del proyecto:	EC-L1071		
Equipo de Proyecto:	Sergio Ardila (INE/RND) y Duval Llaguno (RND/CEC), Co-jefes de Equipo; Alberto Villalba (VPS/ESG); Rosina de Souza (LEG/SGO); Marco Alemán (PDP/CEC); Santiago Schneider (CAN/CEC); Cristina Villalba (CAN/CEC); y Lisa Sofia Restrepo (INE/RND)		
Prestatario:	República de Ecuador (EC)		
Organismo ejecutor:	Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), a través de la Unidad SIGTierras		
Plan de financiamiento:	BID:	US\$	50 millones
	Local:	US\$	21 millones
	Total:	US\$	71 millones
Salvaguardias:	Políticas identificadas:	OP-703, OP-765, OP-704, and OP-102	
	Clasificación:	B	

II. JUSTIFICACIÓN GENERAL Y OBJETIVOS DE LA OPERACIÓN

A. Antecedentes y justificación

- 2.1 La agricultura es estratégica y prioritaria para el desarrollo ecuatoriano, contribuyendo aproximadamente el 9% del PIB en los últimos 10 años, generando entre 30 y 38% de las exportaciones no tradicionales, y constituyendo la alternativa de empleo para el 26% de la población económicamente activa. El sector creció a una tasa promedio anual de 4,9% entre 1995 y 2008, superior a la de la economía en su conjunto (3,4%). No obstante este dinamismo, el sector es heterogéneo, con subsectores tradicionales con restringida capacidad empresarial y acceso a tecnología debido a la falta de acceso a financiamiento que facilite la inversión en asistencia técnica y mejoras productivas. Un factor central que contribuye a dicha restricción es la inseguridad jurídica sobre la propiedad predial en zonas rurales. Según el MAGAP, se estima que el 58% de los predios rurales no cuentan con registros actualizados de la propiedad, y 12% no han recibido títulos. Así mismo, los sistemas catastrales rurales, que deberían servir, tanto la base predial que respalda el sistema de registro, como la base impositiva de los municipios, son casi inexistentes y no cumplen sus funciones.
- 2.2 **Inseguridad en la tenencia de la tierra.** Esta se origina en dos factores claves: (i) barreras a la inscripción de transacciones en el registro de inmuebles; y (ii) ineficiencias en el proceso de adjudicación de tierras.
- 2.3 **Barreras a la inscripción de transacciones inmobiliarias.** El registro de inmuebles es el principal instrumento para garantizar los derechos de propiedad sobre la tierra. En Ecuador, las tarifas y otros costos de transacción así como la

baja efectividad de las oficinas de Registro, han producido una situación de alta informalidad en la situación legal de los propietarios y baja confiabilidad del sistema, el cual se basa en el folio personal, en lugar del predio georeferenciado, que es la manera más eficiente, confiable y segura para el mantenimiento del Registro. Esta situación se originó en gran medida por el marco legal en el que han venido operando estas oficinas. La Ley de Registro (1966) determinaba que cada cantón debía tener un Registrador de la Propiedad, nombrado por la Corte Superior mediante concurso para un plazo de cuatro años, y el Consejo Nacional de la Judicatura, tenía la competencia para controlar el trabajo de notarios y registradores, y para establecer las tarifas por sus servicios. Sin embargo, el control ha sido deficiente y las tarifas se establecen sin considerar las diferencias socioeconómicas entre las grandes ciudades y zonas rurales. La nueva Constitución (2008) introdujo cambios en el marco legal para hacer que el “sistema de registro de la propiedad” sea administrado entre el Ejecutivo y las municipalidades, y que las notarías sean públicas con titulares nombrados por el Consejo de la Judicatura.

- 2.4 **Adjudicación de la tierra pública.** Los principales problemas de operación que inciden adversamente en la titulación eficiente de la tierra del Estado incluyen: (i) procesos administrativos de titulación lentos y costosos para los beneficiarios; (ii) carencia de sistemas técnicos y financieros para apoyar un procesamiento eficiente de los trámites de titulación; y (iii) centralización en la elaboración y aprobación de las providencias de adjudicación en delegaciones regionales y en Quito, lo que incrementa el tiempo y costos para el adjudicatario. Actualmente está en estudio la reestructuración del INDA, o su anexión al MAGAP, y se prevé que la competencia para legalización de tierras pase a ser función de una nueva Subsecretaría del MAGAP, buscando con ello optimizar los procesos de titulación. A su vez, para soportar el esfuerzo de titulación requerido se ha definido que el INDA deberá utilizar la información catastral y de tenencia de tierra generada por el Programa propuesto.
- 2.5 **Inefectividad de los sistemas de catastro.** En la inmensa mayoría de los 221 cantones del país los catastros rurales tienen notables deficiencias que limitan su eficiencia y utilidad, incluyendo: (i) la falta de información básica; (ii) incongruencias entre la información de la oficina y del campo; (iii) baja cobertura territorial; (iv) deficiencias y desactualización de la información y falta de sistemas que faciliten la actualización del valor de los predios; (v) carencia de un sistema de georeferenciación que reduzca errores de mediciones; y (vi) ausencia de vinculación con la información de las oficinas de Registro. Estos problemas se deben a varias razones, entre otras: carencia de información cartográfica actualizada, debilidad institucional de los municipios, falta de recursos humanos capacitados, y ausencia de sistemas de información especializados.
- 2.6 El Gobierno de Ecuador, con el apoyo del Banco, ha venido realizando esfuerzos con miras a atender los retos antes descritos. En 2002, el Banco aprobó el Programa de Regularización y Administración de la Tierra Rural-PRAT-(1376/OC-EC). Con un financiamiento de US\$15,5 millones, el PRAT tuvo como

objetivo desarrollar una metodología de trabajo, los sistemas de información y acuerdos institucionales requeridos para construir sistemas sostenibles que cumplan las funciones que les corresponden para tener mercados de tierras eficientes y apoyar la aplicación de políticas fiscales justas y efectivas por parte de los municipios. Hasta su finalización en 2009¹, la operación logró los siguientes resultados: (i) se catastró y regularizó la situación de la tenencia de la tierra rural de cerca de 84.000 predios rurales, de los 98.000 existentes, en ocho cantones seleccionados que representan la realidad local de las diferentes regiones del país; (ii) se mejoraron los procesos de titulación de INDA y se evacuaron aproximadamente 36.000 expedientes de titulación rezagados e implementaron campañas masivas de titulación en varios cantones del país, entregando cerca de 7.000 títulos adicionales; (iii) se probó una metodología para realizar campañas integradas de catastro, titulación y registro de las tierras; y (iv) se creó el SIGTierra, sistema de información y gestión eficiente y coordinada de los sistemas de catastro y registro a nivel municipal.

- 2.7 El proyecto propuesto descansa en las lecciones de la operación 1376/OC-EC y está concebido como una primera etapa de un programa de largo plazo destinado a la Legalización Masiva de la Tenencia de la Tierra y Actualización de los Catastros, cuyo costo se estima en \$288 millones de dólares, 20% del cual será cubierto por los cantones.
- 2.8 Algunas de las principales lecciones aprendidas de la ejecución de proyectos de titulación y catastro por el Banco, adicional a las experiencias propias del PRAT, son: (i) los proyectos requieren, además de las actividades técnicas y administrativas, coordinaciones institucionales estrechas y campañas de divulgación para generar aceptación de las comunidades y colaboración de los líderes locales; y (ii) el mejoramiento de los sistemas de gestión de la propiedad genera impactos en el mediano a largo plazo, por ello los estudios de impacto deben tomar muestras grandes para identificar estas tendencias.

B. Objetivos y resultados

- 2.9 El objetivo del proyecto es completar la implantación en todo el país de un sistema de gestión de catastro, titulación y registro de la propiedad de la tierra rural, que sea eficiente, confiable y de actualización continua y asegure los derechos de tenencia de la tierra. El financiamiento es coherente con normativa reciente ampliando interpretación de norma constitucional sobre crédito externo.
- 2.10 La primera etapa contempla tres componentes: (i) **Información cartográfica**, financiaría la adquisición de fotografía aérea digital en escala 1:25,000 de todo el territorio nacional (aproximadamente 210.300 km²) como insumo para la elaboración de ortofotomapas a escala 1:5,000; (ii) **Catastro y regularización de la tenencia de la tierra**, financiaría las siguientes cuatro actividades en cuarenta cantones con cada uno de los cuales se firmará un convenio para: (a) actividades de formación del catastro rural, identificación de ocupación de tierra del Estado,

¹ Ver [PCR](#).

provisión de apoyo legal y técnico a los propietarios para legalizar la propiedad de tierra que se encuentre en situación de informalidad jurídica, y la emisión y entrega de escrituras registradas con planos catastrales de los predios legalizados; (b) puesta en operación del Sistema de Información de Gestión de Tierra Rural (SIGTierras) que vincula de manera computarizada los procesos de catastro y registro, y capacitación de funcionarios del municipio; (c) confección de la cartografía temática del municipio; (d) aplicación de la metodología de valoración predial rural desarrollada en el MAGAP-PRAT para contribuir a mejorar la situación fiscal de los municipios; y (iii) **Sistema Nacional de Información de Tierras**, financiaría la adquisición de los equipos y el montajes de la infraestructura informática del sistema para crear un banco de datos nacional que alimentará el Sistema Nacional de Información Territorial. Las etapas posteriores se aprobarían en la medida que se observe una ejecución satisfactoria.

- 2.11 **Resultados esperados.** Al final del proyecto se contará con: (i) propiedad regularizada, catastro actualizado y oficinas de catastro y registro de la propiedad operando con sistemas de información modernos en 40 cantones de los 221 existentes en el país; (ii) cartografía actualizada para todo el país y mapas temáticos (usos de suelos, riesgos de deslizamientos, localización de infraestructura, etc) de gran utilidad para tareas de planeamiento; y (iii) infraestructura del nodo central del Sistema Nacional de Información de Tierras montada y operando. Estos resultados se espera que tendrán impactos a mediano plazo en la actividad económica rural favoreciendo el acceso a financiamiento, y fortaleciendo el flujo de ingresos de los municipios.
- 2.12 **Estrategia del Banco.** La Estrategia del Banco con Ecuador (2008-2011) vigente propone apoyar al país en las áreas de: (i) desarrollo de infraestructura productiva; (ii) desarrollo productivo y acceso al financiamiento; y (iii) inclusión económica y social. El proyecto es coherente con las áreas (ii) y (iii), a través de las cuales se pretende, por un lado, contribuir al fortalecimiento de instituciones para promover la productividad y competitividad a nivel local, y por otro lado contribuir a ampliar el acceso a servicios básicos fortaleciendo el enfoque de planificación estratégica territorial, y mejorando las condiciones del entorno económico, físico y ambiental. Un indicador de resultado a medir durante la implementación de la EBP será el de número de predios legalizados.

III. TEMAS DE DISEÑO Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR

- 3.1 **Marco legal para la vinculación del registro y catastro.** Actualmente, se encuentra en proceso de aprobación legislativa una nueva Ley del Sistema de Registros Nacionales, la cual obligará que las oficinas de registro sean administradas conjuntamente entre los municipios y la función ejecutiva a través de una nueva Dirección de Registro de Datos Públicos, resolviendo gran parte de las limitaciones del marco anterior. Se espera que dicha legislación esté aprobada por el Congreso en 2010. Así mismo, existen propuestas de normas y estándares para la formación del catastro rural. Durante la preparación se deberá analizar las características del nuevo marco legal y verificar que este soportará una operación eficiente de las oficinas de catastro y registro.

- 3.2 Para finalizar el diseño del proyecto se requerirán estudios complementarios en los siguientes temas: (i) estructura operativa de la Unidad Ejecutora, capacidad de ejecución/desembolsos, análisis financiero de los impactos del proyecto en una municipalidad típica; (ii) sostenibilidad de los sistemas de registro y catastro para verificar que los sistemas de catastro y registro montados por el PRAT están siendo actualizados y sus oficinas son sostenibles en términos financieros; y (iii) evaluación económica ex ante y propuesta metodológica para hacer una evaluación de impacto detallada.

IV. SALVAGUARDIAS Y EVALUACIÓN FIDUCIARIA

- 4.1 **Salvaguardias ambientales y sociales.** Se anticipa que el proyecto propuesto tendrá beneficios ambientales y sociales positivos, al contribuir, a la certeza espacial y jurídica de la tierra rural, incluidas las áreas protegidas. Sin embargo, el equipo de proyecto ha seguido la Política de Salvaguardias y Medio Ambiente del Banco (OP-703) y propone una clasificación B. La evaluación ambiental y social inicial propone realizar un análisis que incluya: (i) revisar los procedimientos de regularización de tierras rurales para fortalecer el componente participativo, con especial énfasis en las comunidades indígenas; y (ii) evaluación de las capacidades técnicas e institucionales del Ejecutor para seguir las políticas ambientales del BID y permitir el acceso de las comunidades beneficiarias y el público en general a los reportes e información generada por el proyecto. Durante el diseño del Programa y su ejecución se pondrá especial énfasis en asegurar la capacidad del Ejecutor que le permita atender los aspectos de comunicación y participación, así como la resolución de conflictos; y el cumplimiento de las políticas del Banco: OP-703, OP 765, OP-102, OP-704 y la legislación nacional pertinente.
- 4.2 **Aspectos fiduciarios.** En el programa se considera un eventual financiamiento de gastos retroactivos para procesos de selección ya realizados por el ejecutor, los cuales fueron revisados por el Banco y las conclusiones sobre cumplimiento de Políticas del Banco serán incluidas en el POD. Con base en la información disponible sobre el programa y la experiencia del Ministerio de Agricultura se han identificado los riesgos señalados en la matriz de riesgos.

V. RECURSOS Y CRONOGRAMA

- 5.1 El Anexo V detalla el cronograma y costos de preparación y establece los hitos necesarios para lograr la distribución del POD a QRR el 1 de julio de 2010. Se estima que se requerirá una Cooperación Técnica no reembolsable por un monto de US\$120.000 para contratar cinco consultorías. Adicionalmente se requerirán recursos administrativos para realizar tres misiones, incluyendo la misión de identificación, con un costo de US\$24.800.

Annex I

(Confidential)

SAFEGUARD SCREENING FORM

PROJECT DETAILS	IDB Sector	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-LAND ADMINISTRATION AND REGULATION
	Type of Operation	Investment Loan
	Additional Operation Details	
	Country	ECUADOR
	Project Status	
	Investment Checklist	Institutional Development Investment
	Team Leader	Ardila, Sergio (SERGIOAR@iadb.org)
	Project Title	SIGTIERRAS - National Information System and Management of Rural Lands
	Project Number	EC-L1071
	Safeguard Specialist(s)	Villalba, Alberto Esteban (AVILLALBA@iadb.org)
	Assessment Date	2010-04-01
	Additional Comments	

PROJECT CLASSIFICATION SUMMARY	Project Category: B	Override Rating:	Override Justification:
			Comments:
	Conditions/ Recommendations	<ul style="list-style-type: none"> Category "B" operations require an environmental analysis (see Environment Policy Guideline: Directive B.5 for Environmental Analysis requirements). The Project Team must send to ESR the PP or PCD (or equivalent) containing the Environmental and Social Strategy (the requirements for an ESS are described in the Environment Policy Guideline: Directive B.3) as well as the Safeguard Policy Filter and Safeguard Screening Form Reports. These operations will normally require an environmental and/or social impact analysis, according to, and focusing on, the specific issues identified in the screening process, and an environmental and social management plan (ESMP). However, these operations should also establish safeguard, or monitoring requirements to address environmental and other risks (social, disaster, cultural, health and safety etc.) where necessary. 	

SUMMARY OF IMPACTS/RISKS AND POTENTIAL SOLUTIONS	Identified Impacts/Risks	Potential Solutions
	The operation presents potential for positive impacts or	Opportunities for Indigenous People: The project team should contact GDI and ESG to further develop the opportunity. Please refer to the Indigenous Toolkit for a more detailed description of the potentiality of the project

	opportunities for the indigenous people	(available at: http://sds/handbook/security0/template.cfm?page=16)
	The project is likely to negatively change the use of the land but the related negative impacts will be minor to moderate in nature.	Land use: A Plan should be prepared that defines how land use change will be mitigated (roles and responsibilities, monitoring, budget, etc.) and could be incorporated in the ESMP. Proper consultation should be foreseen. Confirmation should be obtained from experts that the plan can mitigate impacts and also that relevant authorities have approved the Plan. Examples of mitigation include reforestation, GHG offsetting, nutrient fixation in soils, conservation of biodiversity.

DISASTER SUMMARY	Details	Actions
	The Project should include the necessary measures to reduce disaster risk to acceptable levels as determined by the Bank on the basis of generally accepted standards and practices. Alternative prevention and mitigation measures that decrease vulnerability must be analyzed and included in project design and implementation as applicable. These measures should include safety and contingency planning to protect human health and economic assets. Expert opinion and adherence to international standards should be sought, where reasonably necessary.	A Disaster Risk Assessment (DRA), is required, as established under Directive A-2 of the DRM Policy OP-704). Please contact a Natural Disaster Specialist in VPS/ESG or INE/RND for guidance.

ASSESSOR DETAILS	Name of person who completed screening:	Villalba, Alberto Esteban (AVILLALBA@iadb.org)
	Title:	
	Date:	2010-04-01

SAFEGUARD POLICY FILTER REPORT

PROJECT DETAILS	IDB Sector	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-LAND ADMINISTRATION AND REGULATION
	Type of Operation	Investment Loan
	Additional Operation Details	
	Investment Checklist	Institutional Development Investment
	Team Leader	Ardila, Sergio (SERGIOAR@iadb.org)
	Project Title	SIGTIERRAS - National Information System and Management of Rural Lands
	Project Number	EC-L1071
	Safeguard Specialist(s)	Villalba, Alberto Esteban (AVILLALBA@iadb.org)
	Assessment Date	2010-04-01
	Additional Comments	

SAFEGUARD POLICY FILTER RESULTS	Type of Operation	Loan Operation	
	Safeguard Policy Items Identified (Yes)	Potential to affect Indigenous People (also see Indigenous Peoples Policy.).	Resettlement and Indigenous People (B.01)
		Activities to be financed in the project area are located within a geographical area or sector exposed to natural hazards (Type 1 Disaster Risk Scenario).	OP-704 A-2
		The Bank will make available to the public the relevant Project documents.	OP-102
		Environmental or Social liabilities of the project and/or other projects or nearby sites	(B.04)
		An Environmental Assessment will be performed.	(B.05)
		Consultations with affected parties will be performed and considerations of their views will be taken into account.	(B.06)
		The Bank will monitor the executing	(B.07)

		agency/borrower's compliance with all safeguard requirements stipulated in the loan agreement and project operating or credit regulations.	
		Environmental or culturally sensitive areas, defined in the Policy as critical natural habitats or critical cultural sites in project area of influence.	(B.09)
	Potential Safeguard Policy Items(?)	No potential issues identified	
	Recommended Action:	<p>Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s). Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PCD (or equivalent) and Safeguard Screening Form to ESR.</p> <p>The project triggered the Disaster Risk Management policy (OP-704).</p> <p>A Disaster Risk Assessment (DRA), is required, as established under Directive A-2 of the DRM Policy OP-704). Please contact a Natural Disaster Specialist in VPS/ESG or INE/RND for guidance.</p>	
	Additional Comments:		

ASSESSOR DETAILS	Name of person who completed screening:	Villalba, Alberto Esteban (AVILLALBA@iadb.org)
	Title:	
	Date:	2010-04-01

Estrategia Ambiental y Social (ESS)

EC-L1071

Ecuador

1. Descripción del Proyecto:

- 1.1 La presente iniciativa se basa en experiencias anteriores del Banco y se anticipa que el proyecto propuesto tendrá beneficios ambientales y sociales positivos de alto impacto directo e indirecto, al contribuir, mediante la certeza espacial y jurídica de la tierra rural, incluidas las áreas protegidas. El objetivo general del Proyecto es completar la implantación en todo el país de un sistema de gestión de catastro, titulación y registro de la propiedad de la tierra rural, que sea eficiente, confiable y de actualización continua, que asegure los derechos de tenencia de la tierra y apoye la aplicación de políticas tributarias justas y equitativas.
- 1.2 La primera Etapa contempla tres componentes: (i) Información cartográfica, financiaría la adquisición de fotografía aérea digital en escala 1:25,000 de todo el territorio nacional (aproximadamente 210,300 km²) como insumo para la elaboración de ortofotomapas a escala 1:5,000; (ii) Catastro y regularización de la tenencia de la tierra, financiaría las siguientes cuatro actividades en cuarenta municipios para: (a) actividades de formación del catastro rural, identificación de ocupación de tierra del Estado, provisión de apoyo legal y técnico a los propietarios para legalizar la propiedad de la tierra que se encuentre en situación de informalidad jurídica, y la emisión y entrega de escrituras registradas con planos catastrales de los predios legalizados; (b) puesta en operación del Sistema de Información de Gestión de Tierra Rural (SIGTierras) que vincula de marea computarizada los procesos de catastro y registro, y capacitación de funcionarios del municipio; (c) confección de la cartografía temática del municipio; (d) aplicación de la metodología de valoración predial rural desarrollada en el MAGAP-PRAT para contribuir a mejorar la situación fiscal de los municipios; y (iii) Sistema Nacional de Información de Tierras, financiaría la adquisición de los equipos y el montajes de la infraestructura informática del sistema para crear un banco de datos nacional que alimentará el Sistema Nacional de Información Territorial.
- 1.3 Al final del proyecto se contará con: (i) propiedad regularizada, catastro actualizado y oficinas de catastro y registro de la propiedad operando con sistemas de información modernos en 40 cantones de los 221 existentes en Ecuador; (ii) cartografía actualizada para todo el país y mapas temáticos (áreas protegidas, ordenamiento territorial, tierras indígenas, usos de suelos, riesgos de deslizamientos y desastres naturales, localización de infraestructura, etc) de gran utilidad para tareas de planeamiento territorial y gestión de recursos naturales; (iii) infraestructura del nodo central del Sistema Nacional de Información de Tierras montada y operando.

2. Marco Institucional y Regulatorio:

- 2.1 El Organismo Ejecutor de la presente iniciativa es el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), que a través de la Unidad SIGTierras han venido implementado en los últimos años diversos mandatos acordes al marco regulatorio y la normativa legal de la República del Ecuador relacionados a la reformas impositivas, jurídicas, tenencia de la tierra, gestión del territorio y de los recursos naturales, incluyendo a las áreas protegidas.
- 2.2 Del mismo modo, el proyecto contempla el cumplimiento de los requerimientos ambientales y sociales del Banco de acuerdo a la Política de Salvaguardas y sus respectivas directivas.

3. Impactos, Riesgos y Medidas de Mitigación:

- 3.1 Se espera que la presente iniciativa presente impactos positivos desde el punto de vista ambiental, social y económico. La iniciativa generará herramientas y medidas que facilitarían el acceso a la información pública, transacciones de compra-venta inmobiliaria, gestión del territorio y de recursos naturales. Sin embargo, existe un riesgo potencial de marginamiento de potenciales beneficiarios como por ejemplo, las comunidades rurales más alejadas, comunidades indígenas, tierras comunitarias, etc, las cuales se podrían encontrar actualmente en una situación de conflictos en la tenencia de la tierra o afectados por vacíos en la legislación, falta datos catastrales actualizados, superposición de propiedades, etc. Del mismo modo, debido a que varias áreas protegidas se encuentran en proceso de creación y algunas de ellas nunca pudieron finalizar su proceso de consolidación, existe el riesgo de que sean afectadas en su extensión territorial, legalización de los títulos o en sus planes de manejo debido a los mismos motivos citados anteriormente. También, existe un gran desafío a nivel institucional y científico para incorporar nuevas aplicaciones tecnológicas espaciales, informáticas y la obtención de datos relevantes para el ordenamiento territorial y la gestión de recursos naturales. Los riesgos relacionados al último punto, se relacionan a la dificultad de obtener datos concretos y actualizados de la inmensa complejidad del Ecuador, en especial por su diversidad étnica y biológica, ecosistemas terrestres y acuáticos, y sus particularidades geográficas y climáticas que pudieran crear herramientas para la gestión de desastres naturales por citar alguna de ellas.
- 3.2 Finalmente, debido a que la información generada por el proyecto es considerada de alto valor estratégico, político y económico, existe el riesgo de que no sea apropiadamente puesta a disposición del público en general y de los beneficiarios en particular. Esto último, podría generar potenciales conflictos sociales y políticos si no son gestionados apropiadamente y con la debida participación de los beneficiarios y otros actores relevantes.
- 3.3 En este contexto, la evaluación ambiental y social inicial propone realizar un análisis que incluya: (i) revisar los procedimientos de regularización de tierras rurales para fortalecer el componente participativo, con especial énfasis en las comunidades indígenas; (ii) evaluación de las capacidades técnicas e institucionales del Ejecutor para seguir las

políticas ambientales y sociales del BID y permitir el acceso de las comunidades beneficiarias y el público en general a los reportes e información generada por el proyecto.

- 3.4 Durante el diseño del Programa y su ejecución se pondrá especial énfasis en asegurar la capacidad del Ejecutor que le permita atender los aspectos de comunicación y participación, así como la resolución de conflictos; y el cumplimiento de las políticas del Banco: OP-703, OP 765, OP-102, OP-704 y la legislación nacional pertinente.

4. Estrategia Ambiental y Social para la Debida Diligencia:

- 4.1 El proceso de la Debida Diligencia ambiental y social del Banco tiene por objetivo abordar los principales impactos y riesgos ya identificados, identificar nuevos impactos y profundizar sobre las medidas de mitigación y compensación que sean apropiadas. Además, se buscarán los mecanismos institucionales y alianzas estratégicas con los actores de la sociedad civil, principalmente organizaciones ambientalistas, grupos indígenas e instituciones universitarias y de investigación científica que puedan ayudar a la obtención de información y al diseño de las medidas de mitigación y compensación de los potenciales impactos ambientales y sociales mencionados anteriormente. Del mismo modo, se buscarán mecanismos de participación ciudadana eficientes con los beneficiarios y actores relevantes para los procesos de consulta pública y disponibilidad de la información.
- 4.2 En cuanto a los vacíos de información, el Ejecutor de la presente iniciativa buscará beneficiarse de las alianzas estratégicas y procesos de participación ciudadana mencionados anteriormente, para obtener datos relevantes existentes y creación de nuevas capas de información necesarias para el ordenamiento territorial y gestión de recursos naturales.
- 4.3 Durante el proceso de la Debida Diligencia del presente proyecto, se tendrán en cuenta los siguientes temas:
- i) Evaluación del cumplimiento por parte del Proyecto con la normativa legal nacional y local del Ecuador y las políticas y directivas del BID.
 - ii) Identificación y evaluación de potenciales impactos ambientales y sociales directos, indirectos y acumulativos relacionados al Proyecto.
 - iii) Identificación y evaluación de las correspondientes medidas de mitigación y compensación ambiental y social para su posterior monitoreo, asegurando la inclusión de indicadores medibles para futuras actividades de supervisión, con hitos concretos, cronogramas, presupuestos y responsables.
 - iv) Evaluación de las medidas para asegurar el cumplimiento de las consultas públicas que sean apropiadas, la disponibilidad de información y participación ciudadana, incluyendo planes de comunicación para los temas sensitivos que sean identificados.
 - v) Evaluación de los futuros procedimientos para monitoreo y supervisión para asegurar la implementación apropiada de los requerimientos ambientales y sociales.
 - vi) Evaluación de potenciales riesgos legales y de reputación para el Banco.

5. Filtro de Salvaguardas Ambientales y Sociales:

- 5.1 En cumplimiento de la Política de Salvaguardas Ambientales y Sociales del Banco, se ha procedido a la utilización del filtro correspondiente, de acuerdo a la política de preevaluación y clasificación de proyectos (OP-703, Directrices B.4 y B.5) arrojando como resultado la Categoría B como clasificación del proyecto, por los potenciales riesgos relacionados a los temas sensibles de manejo de información territorial, catastral, recursos naturales, etc, en especial, si afectan a áreas protegidas, comunidades rurales vulnerables y comunidades indígenas. Sin embargo, cabe resaltar que la presente iniciativa tiene un alto potencial de impactos positivos directos e indirectos si los mencionados riesgos son gestionados apropiadamente. Para mayor información, ver formularios del filtro en los anexos correspondientes al Perfil del Proyecto (SPF y SSF).

ECUADOR**(EC-L1071)****INDICE DE ESTUDIOS SECTORIALES TERMINADOS Y PROPUESTOS**

Estudios	Nombre	Fecha terminación	Fecha esperada terminación
A) Estudios Concluidos.			
Evaluación proyecto PRAT	1. Evaluación Final del Programa de Regularización y Administración de Tierras Rurales. 2. Informe de terminación de Proyecto (PCR)	Nov./2008 Mayo/2009	
Propuesta de Proyecto	Programa Sistema nacional de Información y gestión de Tierras Rurales e Infraestructura tecnológica (MAGAP)	Dic./2009	
B) Estudios a realizar.			
	1. Análisis sostenibilidad financiera		Junio 30/2010
	2. Análisis económico-metodología evaluación		Junio 15/2010
	3. Evaluación capacidad institucional/fiduciaria		Junio 15/2010
	4. Análisis socio-ambiental		Junio 15/2010
	5. Análisis aspectos técnicos		Junio 30/2010